En principio, no queremos interpretar esta particularidad, como una mayor identificación de Fedecámaras con uno u otro proyecto (militar-democrático) -aún cuando pareciera ser que el sector empresarial da por sentado que en los regímenes cerrados de corte militar se dan mejores oportunidades (o "libertades") para la acumulación privada del capital-, sino que queremos destacar el hecho de que frente a esas variaciones coyunturales de gobierno la representación empresarial ha actuado inequívocamente como sostén fundamental del Estado Capitalista. En otras palabras, como fuerza social ha consolidado un Estado y una determinada hegemonía de clase, lo que demuestra, que sus estrategias políticas, por lo menos la relativa a su relación con el intervencionismo estatal, le han funcionado orgánicamente: ha sido -y es- su interés particular de clase el que se ha imbricado como interés general en el colectivo nacional. Otros proyectos hegemónicos han fracasado o permanecen en situación de profunda latencia, sobre todo, en esta época de retroceso y de repliegue de las alternativas contrahegemónicas o revolucionarias.

IV. FEDECAMARAS Y EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO (1945-1958)

Una revisión preliminar de las resoluciones de Fedecámaras ha permitido el señalamiento de que la organización empresarial venezolana, en sus primeros 14 años (1944-1958), mantuvo una posición inequívoca frente al intervencionismo del Estado, independientemente, de la naturaleza distinta de los gobiernos que se sucedieron en ese período. Y que esta particularidad podría ser considerada como una demostración de claridad política del poder económico respecto a la necesidad de consolidar el Estado Capitalista.

Así mismo, hemos afirmado que aquella posición no es anti-intervencionista de por sí, sino que la misma se inserta como una relación posible entre el sector empresarial y el Estado, no sólo para fundamentar socialmente la legitimación de este último, sino también para viabilizar una determinada hegemonía de clase.

En la explicación de esa estrategia política de Fedecámaras se ha recurrido a la tesis de que el intervencionismo del Estado (por lo menos, en el caso venezolano) es inherente a la propia lógica del capital, en tanto, su acción no altera la naturaleza de la propiedad privada capitalista ni las de la apropiación de la riqueza social que ésta presupone; garantizando así que buena parte de la acumulación del capital sea función directa de la capacidad rentista del Estado.

Esas premisas nos llevan ahora a hurgar sistemáticamente en los "papeles" de Fedecámaras producidos en aquellos 14 años para demostrar si realmente la organización central del empresariado nacional ha mantenido o no una línea uniforme (filosófica y de acción) frente al intervencionismo estatal sostenido por aquellos tipos de gobierno.

El lapso histórico aludido (1944-1958) se caracteriza esencialmente por la heterogeneidad de los gobiernos surgidos y expresa por ello un buen reflejo de las variaciones del sistema político venezolano en la conducción del Estado Capitalista moderno. No es difícil establecer allí la transcurencia de los dos tipos de proyectos políticos a través de los cuales el capitalismo como

modo de vida se instituye como predominante en una forma ción económico-social: la dictadura militar (a veces llevada en otros países al extremo del fascismo) y la Democracia Representativa.

Proyectos que, en tal caso, han estado presentes como alternativas del poder hegemónico de acuerdo a la capacidad de movilización popular de las fuerzas sociales que pugnan por la transformación radical de las relaciones sociales garantes de la explotación y la diferenciación sociales.

Así, en la historia nacional de aquellos momentos se suceden en aparente contradicción los intentos inicia les de la democracia liberal ocurridos entre 1945-1948 y la dictadura militar de 1948-1958. Estas experiencias gubernamentales, a pesar de sus diferencias de estilo (ejemplo, en lo relativo a la movilización política y presencia de partidos políticos), y de concepciones sobre el crecimiento económico, contribuyeron en su totalidad a legitimar un Estado y unas relaciones de clases, abrigadas en el ejercicio efectivo del poder de un sector social sobre otro, mediado por la imposición del dominio como un elemento inherente a la estructuración del hecho social.

Por supuesto, la relación poder económico-Estado resalta como eje fundante en esa ordenación, dándole así al espacio político una importancia esencial en la dinámica social. De allí que resulte interesante evaluar la estrategia política básica que desarrolló el sector empresarial en aquellos períodos gubernamentales, por cuanto, a todas luces le resultó efectiva si se considera que en la actualidad (proyecto democrático) está en una posición ventajosa de ejercicio indiscutible de su hegemonía de clase.

Como se ha señalado, esa estrategia no ha sido otra sino la de establecer algunas "reglas del juego" frente al intervencionismo del Estado, que van desde no enfrentarlo radicalmente (lo que demuestra una bien definida concepción del Estado como relación de fuerzas), hasta el auspicio, desde aquella "función" estatal, de una legitimación colectiva (consenso social) de las relaciones de poder, así como consolidar la simbiosis que garantiza la acumulación del capital a partir de la capacidad rentista del Estado.

En ese orden de ideas, se inserta la hipótesis central de esta investigación: Fedecámaras ha mantenido una línea uniforme en sus posiciones frente al intervencio-

nismo del Estado en los distintos gobiernos sucedidos entre 1944-1958, independientemente, de la naturaleza distinta de los mismos, estando ello en la base de la imposición de un proyecto hegemónico.

Hipótesis, que nos obliga a recordar una frase periodística de Ramón Escovar Salóm: "... cuando el Estado se vuelve poderoso se despierta el fenómeno asociativo que consiste en que la gente crea asociaciones nuevas para proteger sus intereses y obtener ventajas en la tremenda pugna por la distribución del ingreso".¹

Al intentar alcanzar el objetivo implícito en aquella hipótesis se tendrá cuidado de asumir la relación Fedecámaras-Intervencionismo Estatal como una estrategia política, por lo que no es nuestra finalidad abundar en el aspecto económico del problema. Las implicaciones de este tipo aparecerán en el discurso como algo tangencial, asumiendo así la posibilidad del espacio de lo político como unidad objetiva en el proceso de producción del conocimiento, en tanto, representa una dimensión significativa del movimiento histórico-social.

1-----, "Profundizar la Democracia", El Nacional, Caracas, 4-4-88, p. A-4.

Igual aclaratoria resulta pertinente respecto al análisis histórico: no se trata de elaborar un discurso bajo el signo de esa exigencia, sólo se buscan los referentes concretos necesarios para darle ubicación sistemática a los elementos definitorios de la problemática que hemos delimitado. De allí, incluso, la periodización bajo la cual se orienta esta investigación, que es la misma que recoge la sucesión gubernamental señalada en páginas anteriores.

1.- FEDECAMARAS Y EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO. 1945-1948.

El 18 de octubre de 1945 se concretó el golpe militar que derrocó a Isaías Medina Angarita, y a decir de uno de los apologistas de ese acto conocido como "Revolución de Octubre", el mismo "es el suceso de mayor significación política en la historia venezolana del siglo XX".²

Independientemente de que se admita tan exagerada apreciación, el gobierno que se instaló en aquel momento -una autodenominada Junta Revolucionaria de Gobierno,

² Simón Alberto Consalvi, en la Introducción a: Rómulo Betancourt, *El 18 de Octubre de 1945, Génesis y Realizaciones de una Revolución Democrática*, Barcelona, Edit. Seix Barral, 1979, p. 11.

presidida por Rómulo Betancourt e integrada además por Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Mayor Carlos Delgado Chalbaud, Capitán Mario Vargas y Edmundo Fernández- anunció, en su propia Acta Constitutiva, que llevaría a cabo profundas transformaciones económicas, sociales y políticas, inspirado en un intento de democratización real del sistema político venezolano, sin dejar de anunciar un discurso "populista" con pretensiones legitimadoras; obvio en un proyecto que se definía como democrático-liberal. Así se afirmó que la política de reformas inmediatas se tomarían "sin demagogia ni aparatosidad, con sencillez de quienes están cumpliendo su deber hacia la colectividad", y en nombre de la solución de "las más apremiantes necesidades de las clases media, obrera y campesina".³

No hay duda de que el apoyo expresado por distintos sectores de la sociedad, y de manera especial, el dado por las fuerzas económicas tanto nacionales como extranjeras (Estados Unidos, primordialmente) reforzaba aquella disposición que no ocultaba su direccionalidad democrático-burguesa. En este particular resalta la visita de la máxima dirigencia de Fedecámaras a la Junta de Gobierno el 22 de Octubre de 1945, en la que el Presidente

³ Ver el primer "Comunicado del Gobierno Provisional", dirigido a la nación el 19 de Octubre de 1945.

le anuncia la creación del Consejo Nacional de Economía "para planificar y coordinar todas las actividades económicas" y el compromiso "de armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo". Un día antes, la Cámara de Industriales de Caracas había hecho público el siguiente acuerdo: "Prestar dentro de sus actividades específicamente económicas, su colaboración y recabar de la citada Junta de Gobierno la realización de sus ofrecimientos..."⁴

Así mismo, es de destacar la premura de los Estados Unidos -obviamente por la magnitud de sus intereses petroleros en el país- de dejar sentado su reconocimiento al gobierno provisional. En la nación hegemónica se afirmó: "Los intereses petroleros norteamericanos -destacó un periódico de la época- creen que el régimen de Betancourt es más democrático que el antiguo régimen de Medina, y aseguran que no habrán dificultades serias entre Estados Unidos y Venezuela acerca de la producción petrolera ni la propiedad de las explotaciones petroleras en Venezuela".⁵

⁴ El Nacional, Caracas, 23-10-1945, citado en José Rivas Rivas, Historia Gráfica de Venezuela 1945-1948, Caracas, Centro Editor, Tomo III, 1972, pp. 28-29.

⁵ El Heraldó, Caracas, 30-October-1945, citado en José Rivas Rivas, Ob. cit, p. 34.

En ese contexto, que reproduce un total consenso a favor del intento democrático en las principales "fuerzas vivas" del país (Partidos Políticos como el PCV; la Unión Nacional de Estudiantes; Profesores Universitarios; Colegio de Médicos del Dtto. Federal; Federación de Trabajadores del Dtto. Federal y del Estado Miranda, etc), las reformas anunciadas se suceden rápidamente en el plano político con las medidas tomadas para garantizar el derecho al voto universal, directo y secreto; en el plano social, por la profundización de esquemas educativos, por la reducción de costos de viviendas y alquileres, por el auspicio de la participación sindical y mejoras de las relaciones laborales, etc; y en el terreno económico, con iniciativas importantes -a pesar de sus limitaciones- en la cuestión petrolera y en la reforma agraria, así como en el mantenimiento de la relación financiera del Estado con el sector empresarial, expresada, tanto en los planes de otorgamientos de créditos, como en la creación del Consejo Nacional de Economía y de un organismo centralizador del fomento económico como la Corporación Venezolana de Fomento, la cual sustituyó a la anterior Junta de Fomento de la Producción creada en el gobierno de Medina.

Aquella intención ideológica de "popular" más el torrente de esas iniciativas, no tenía otro objetivo

sino el de garantizar un espacio propio de legitimación del gobierno y con él solidificar la base estructural del Estado, sobre todo, en su capacidad interventora, tanto en lo económico como en el control social. Era el reto de acabar de una vez con el estilo tradicional del caudillismo o del gobierno identificado con un individuo o una camarilla, para sembrar en el colectivo social la idea de gobierno y el Estado como Instituciones.⁶

El hecho, por ejemplo, de que los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno decidieran no participar como candidatos presidenciales⁷ en las primeras elecciones generales concebidas bajo el nuevo estatuto electoral (Constitución de 1947), promovido por ellos mismos, se puede entender como un indicador preciso de aquella "función" orgánica del gobierno para la consolidación del Estado Capitalista moderno. Desde esta pers-

6 Cuando ya habíamos redactado esta apreciación, apareció en un diario capitalino un artículo de opinión firmado por Victor Vidal, de quien se dice es realmente José Vicente Rangel, donde se expresó un criterio coincidente con el nuestro en líneas generales. Allí se afirmó: "La medida del desarrollo democrático de un país, de su madurez institucional, la da precisamente el deslinde; es decir, la posibilidad y certidumbre que se tiene de que una cosa son los hombres y otras las instituciones. Que la conducta personal de alguien no tiene por qué comprometer el nombre y el prestigio de una institución". (Victor Vidal, "La Familia Militar", en El Nacional, Caracas, Jueves, 21-4-1988, p. A-6).

7 Decreto emitido por la Junta el 22 de Octubre de 1945.

pectiva, resultaría ingenuo creer que el objetivo de tal medida fue el interés accióndemocratista de "cerrarle el paso" a las posibles aspiraciones de los dos miembros militares de la Junta, o como señaló el propio Betancourt, que ella simplemente respondió a "...la razonable convicción -la de él- de que el próximo Presidente de la República sería un hombre de Acción Democrática, por el indiscutible respaldo mayoritario del pueblo a ese Partido..."⁸

Incluso, el "Partido del Pueblo", tuvo mucho cuidado de enfrentar las acusaciones, sobre todo de la Iglesia y, a veces, del Partido Comunista, que le endilgaban la intención de crear una "oligarquía partidista". Desde un principio mostró Acción Democrática una definición precisa sobre la importancia del rol de los Partidos Políticos en la nueva racionalización del Estado, y por tanto, no se podía dar el lujo que el instrumento básico de la legitimación a través del logro de lo consensual y la difusionalidad de intereses contradictorios, pudiera ser identificado con las prácticas ancladas en la memoria colectiva como lo propio de la autocracia. "En efecto -señala Andrés Stambouli en su análisis de la

⁸ Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo, Colombia, Edit. Senderos, 3a edición, 1969, p. 249

época-, la organización y movilización de grandes masas y su incorporación al proceso decisorio para designar a las autoridades de la sociedad, significaba un cambio sustancial en las reglas del juego hasta entonces imperantes, mediante la fijación de nuevos actores y la exclusión, en la práctica, de las élites políticas tradicionales. Los nuevos actores del proceso político, los partidos, se convirtieron en los principales vehículos de la acción política".⁹

Aquí mismo, inmerso en la necesidad inmediata de legitimar un estilo distinto de lo político, se ubicaría la acción de "moralizar el ejercicio de las funciones administrativas" del Estado implícita en el decreto del 27 de Noviembre de 1945. Mediante el mismo se creó el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa -con la misión de enjuiciar a los acusados de peculado- que presumía de darle al nuevo gobierno una conciencia práctica de "manos limpias" al poder.¹⁰ El mismo Betancourt mostraría su empeño en dejar establecida la diferencia entre este Tribunal y la cláusula confiscatoria establecida en la Constitución de 1936 aplicada por López Con-

⁹ Andrés Stambouli, *Ob. cit*, p. 71

¹⁰ El texto completo de este Decreto aparece en la obra de José Rivas Rivas, *Ob. cit* pp. 39-40.

treras y Medina en contra de algunas propiedades de Gómez y de sus herederos, socios y amigos.¹¹

No obstante, donde mayormente se puede apreciar el esfuerzo legitimador del Estado es en las propias medidas económicas, políticas y sociales, desarrolladas por el nuevo régimen, a pesar de su corta duración. Veamos.

Cumpliendo con el compromiso anunciado en el plano político, el 15 de Marzo de 1946, se aprobó un Estatuto Electoral* con amplias proyecciones democráticas, sobre todo, la referida al ejercicio soberano del voto para todo venezolano mayor de 18 años (sin excepción de sexo, religión, educación, etc) para la elección del Presidente de la República, de los Cuerpos Legislativos (Congreso Nacional y Asambleas Legislativas) y los Concejos Municipales. Bajo esa orientación, y con un renovado Conse

11 -----, Venezuela, Política y Petróleo, pp. 270-271

* La idea original de este Estatuto Electoral fue presentada por Rómulo Betancourt, en su condición de Presidente de la Junta, en un discurso dirigido a la Nación el 30 de Octubre de 1945. La comisión nombrada para tal efecto, integrado por destacados jurisconsultos, entregó el Anteproyecto del mismo el 2 de Febrero de 1946 y, desde ese momento, fue sometido al debate público. No obstante, fueron pocas las modificaciones que se hicieron al documento inicial. En el mismo Decreto de legalización del mismo se señalaban atribuciones significativas del Consejo Supremo Electoral, y su sola aprobación generó un inusitado clima político-electoral en todo el país.

jo Supremo Electoral que se instaló oficialmente el 1º de Abril del mismo año, se realizaron las elecciones del 27 de Octubre de 1946 para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, la cual -con mayoría de Acción Democrática; obtuvo más del 70% de los votos que le permitió obtener 137 bancas de 160-, promulgó la nueva Constitución Nacional el 5 de Julio de 1947. Bajo el hilo conductor de la misma se realizaron las elecciones generales del 14 de Diciembre de 1947, de las cuales salió electo Rómulo Gallegos como Presidente de la República. Este iniciaría su mandato el 14 de Febrero de 1948.

Esta Constitución, considerada como una de las más avanzadas de América Latina para aquel momento, tanto en el reconocimiento y auspicio de principios políticos democráticos como en la garantía de derechos sociales básicos para el individuo (derecho al trabajo, a la salud, a la educación gratuita, a la seguridad social laboral, etc), concretó el instrumental jurídico del Estado, dándole mayor fisonomía estructural y mayor capacidad legal para su capacidad administrativa. Estas dos finalidades políticas, propias de una Constitución democrático-liberal que inicia garantizando el derecho a la propiedad privada y, de manera simultánea, reservándole al Estado cierta posibilidad para la asistencia social pública, sopor-

te de su legitimación frente a las fuerzas sociales, son reconocidas abiertamente por Rómulo Betancourt en la siguiente afirmación: "La Constitución de 1947 pautó, como norma constitucional implícita, el principio del Centralismo político, ya que no se concibe cómo pueda planificar nacionalmente el Poder Ejecutivo si los gobernantes regionales no son de la libre elección y remoción del Jefe de Estado. Al propio tiempo, la Constitución consagró en forma expresa saludables principios de descentralización administrativa, en lo que no afectará a los planes nacionales de conjunto".¹² Mejor expresión del favorecimiento al centralismo político-administrativo típico del Estado Capitalista moderno debe ser difícil de encontrar, especialmente, cuando ese centralismo se entiende como la organización política del Estado "única posible y como la más deseable".¹³

Incluso, uno de los ideólogos de Acción Democrática, Simón Alberto Consalvi, en un análisis posterior despejaba dudas para cualquier interpretación errónea sobre aquellas finalidades políticas de la Constitución referida. Así, indica: "La Constitución de 1947 le señalaba al Estado un papel primordial en la planificación

¹² Rómulo Betancourt, Ob. cit., p. 261

¹³ Ibidem, p. 262

del desarrollo y establecía al mismo tiempo las bases de una acción sistemática en todos los asuntos de la economía nacional, acción ciertamente indispensable en un país como Venezuela, caracterizado por ser un Estado de grandes ingresos y el cual necesariamente debe y tiene que ser el centro de todo desarrollo y más si pretende, como pretendió y se emprendió en 1945, un desarrollo equilibrado y un reparto equitativo de la riqueza nacional".¹⁴

Estas acciones no sonaban contradictorias con el proyecto democrático, al contrario, le estaban dando suficiente campo a una determinada función económica del Estado que permitiendo espacios propios para el sector privado no desperdiciara esa capacidad intervencionista, prácticamente establecida jurídicamente -según la interpretación de Consalvi-, para legitimar la relación de fuerza condensada en él. Así deviene en política esa función orgánica del intervencionismo estatal, por cuanto, tiende a ocultar su indispensabilidad para la acumulación de capital en un régimen que se autodefine como "representante de los intereses populares".

14 Simón Alberto Consalvi, *Ob. cit.*, p. 15

La direccionalidad de las medidas económicas de la Junta de Gobierno, mantenida no sólo en la amplitud demostrada para garantizar la presencia significativa del sector empresarial en el diseño del crecimiento económico nacional, sino más aún en la ordenación de un circuito económico que termina concentrando la distribución de la riqueza social en una clase social específica, sería un elemento fundante para que el Estado Capitalista se consolidara, incluso, más allá de la propia existencia coyuntural de aquel gobierno. Revisemos algunas de tales medidas.

Aparte de intentos tímidos de transformar la tenencia de la tierra a través del reparto de la misma a los campesinos, básicamente, la de propiedad del Estado y de terrenos de bajo índice productivo, la cuestión agraria no tuvo mayor trascendencia en la política económica de la Junta, a lo que contribuyó, fundamentalmente, el hecho de que la Ley de Reforma Agraria promovida por aquella entró en vigencia a escasas cinco semanas de la caída del gobierno de Rómulo Gallegos. No obstante, habría de reconocer el esfuerzo mismo de atender uno de los graves problemas del país en el medio rural como lo era el latifundio; de auspiciar programas de créditos agropecuarios e incentivar la formación de cooperativas

de producción en el propio campo, así como la de emprender mejoras a las condiciones sociales del campesinado.¹⁵

Donde significativamente se sintió la acción de la Junta Revolucionaria de Gobierno fue en la política petrolera, a pesar del conservadurismo mostrado al renegar de la nacionalización integral y de no alterar, en consecuencia, los intereses imperialistas que controlaban la más importante industria del país. Sin embargo, inicialmente, haciendo uso del espíritu de la Ley de Hidrocarburos de 1943, ejecutada en el gobierno de Medina Angarita, se logró aumentar la tasa impositiva a las utilidades obtenidas por la industria petrolera mediante la aplicación del Decreto de Impuesto Extraordinario promulgado el 31 de Diciembre de 1945, el cual afectaba las ganancias por encima de 800.000 bolívares, encontrándose allí mayoritariamente los consorcios extranjeros del petróleo; luego se promovió el Decreto Ley 212 de 1947. Con él se elevaba el impuesto progresivo sobre la renta global hasta un máximo de 26% sobre las rentas mayores de 28 millones de bolívares, afectando de nuevo en forma directa a los intereses petroleros; hasta que en 1948 se

15 Los alcances de la cuestión agraria emprendida por la Junta pueden encontrarse en: Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo, Ob. cit, pp. 411-434.

estableció de manera definitiva el cumplimiento del conocido como 50/50, a través del cual, las compañías petroleras no podían obtener ganancias superiores a las entregadas a la nación por concepto de impuestos a esa actividad: "... si sumados todos los impuestos pagados por las empresas, la tributación de éstas no alcanzaba el 50% de sus ganancias, quedaban obligadas a satisfacer al Fisco la respectiva diferencia".¹⁶

Todas esas iniciativas, valiosas en lo referente a tener el país una mayor participación en lo obtenido de la explotación de uno de sus recursos naturales básicos, tenían el respaldo teórico-instrumental de la política petrolera diseñada por Acción Democrática,¹⁷ y, lo más importante, contribuyeron con la ampliación de la capacidad interventora del Estado, sobre todo, debido a que las mismas coincidieron favorablemente con la finalización de la II Guerra Mundial, lo cual había incidido en el aumento de la producción petrolera y de los precios internacionales, arrojando así, en el contexto de aquellas políticas impositivas, niveles mayores de ingresos para el Estado Venezolano. Las siguientes cifras son elocuentes en este sentido: "En 1945, los pozos venezo-

16 Ibidem, p. 295

17 Un resumen de esta política está incluido en la obra de Rómulo Betancourt, *Ob. cit.*, pp. 283-284.

lanos arrojaron 323 millones de barriles, aumentándose en un 72 por ciento la producción sobre el volumen de 1938; en 1946, se pasó al doble de esa producción, extrayéndose de los yacimientos nacionales 388 millones de barriles. En 1947, el aumento en relación con el mismo año base (1938) fue de 131 por ciento, ya que la producción alcanzó a 435 millones de barriles. En 1948 continuó el mismo ritmo de aumento, con una producción de 475 millones de barriles, que significó un aumento adicional del 22 por ciento. La producción de 1938 fue aumentada así en una y media vez. (Tomado de: Rómulo Betancourt, *Venezuela, Política y Petróleo*, Caracas, Editorial Senderos, 1969, p. 291).

Con ese aumento significativo de la renta petrolera, el Estado consolidaba su fuerza definitiva en el terreno del ordenamiento económico, sin llegar a negar, por supuesto, la articulación instrumental de estos beneficios con las aspiraciones del sector empresarial privado, sobre todo, la relativa al financiamiento y facilidades de suministro de materias primas para el desarrollo de industrias básicas. Esta relación estaba implícita en el contenido de uno de los lineamientos de aquella política petrolera, como era el siguiente: "Inversión de

una cuota elevada de los ingresos obtenidos de la nueva política impositiva sobre el petróleo en crear una economía diversificada y propia, netamente venezolana."¹⁸

Esa economía estaba entendida como de naturaleza capitalista, bien por la vía de la empresa privada en sí misma o por la modalidad de empresas mixtas entre el sector privado y el Estado. Así, un hecho económico, como lo fue el crédito dado por el Estado a la iniciativa privada, afianza esta apreciación. Veamos: "En el lapso relativamente corto que lleva de funcionamiento, la Corporación Venezolana de Fomento ha prestado más de ciento veinte millones de bolívares a empresarios particulares dedicados a actividades agrícolas, industriales, mineras y pecuarias. Préstamos éstos a veinte años de plazo en su mayoría y al razonable interés del cuatro por ciento..."¹⁹

Esa orientación económica a partir del Estado fue sustentada claramente por Betancourt cuando afirmó: "También es ya tesis generalmente admitida que el mejoramienu

18 *Ibidem*, p. 284

19 Rómulo Betancourt, en el "Mensaje-Balance al Congreso y a la Nación de 40 meses de Gobierno", el 12 de Febrero de 1948. Está incluido el texto completo en Rómulo Betancourt, El 18 de Octubre de 1945, Ob. cit, pp. 273-297.

to material de un país tiene estrecho nexo con la producción abundante de bienes de uso y de consumo, así como con la eficaz prestación de servicios; y que tales objetivos son de imposible logro en las llamadas áreas subdesarrolladas si la vida económica de las colectividades se deja al exclusivo arbitrio de la iniciativa individual. (...) Hoy la tesis del intervencionismo estatal en los procesos económicos, para encauzarlos y conducirlos hacia metas de mejoramiento colectivo y de superación nacional, constituye el ABC de toda moderna política de gobierno." 20

Con este último fundamento y con el objetivo de darle coherencia a la relación Estado-poder económico se constituyen en 1946 el Consejo Nacional de Economía y la Corporación Venezolana de Fomento, con carácter de ente consultor y planificador de la actividad económica, respectivamente. Aquel Consejo Nacional de Economía estaba previsto en la Constitución de 1936 (régimen de López Contreras) pero no había sido llevado a la práctica y la Junta lo conforma atendiendo expresas solicitudes del sector empresarial, el cual, marcó su interés en la propia concepción de los objetivos del mismo. Así, por ejem

20 Rómulo Betancourt, *Ob. cit.*, p. 375

plo, en el artículo sexto de su constitución puede leerse: "... en el estudio de las cuestiones que le competen, tendrá en cuenta el Consejo de Economía Nacional las opiniones de las distintas entidades representativas de los intereses económicos del país, las cuales solicitará siempre que lo juzgare oportuno".²¹

Por su parte, la Corporación Venezolana de Fomento fue concebida como instrumento del Estado para impulsar la economía y, a través de ella, con dotación de recursos económicos elevados (372 millones para fines de 1948), se implementó un plan audaz de financiamiento a la iniciativa privada capitalista. Tan sólo entre 1947-1948, los créditos pasaron de 84 millones en el primer año a 109 millones en 1948, esto en el sector industrial. En el sector agropecuario se pasó de 10 millones de bolívares en 1945 hasta 116 millones en 1948. En su junta directiva de cinco miembros estarían incluidos, según su reglamentación, dos escogidos de una lista de candidatos propuesta por Fedecámaras. Su concepción y política de crecimiento económico era esencialmente de naturaleza capitalista y canalizó así la distribución

²¹ Decreto 211 del 9-3-46 mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Economía. Este decreto aparece incluido en su totalidad en la obra de José Rivas Rivas, *Ob. cit.*, pp. 57-58.

del excedente fiscal petrolero a los planes de acumulación privada del capital.

Esa función no podía tener otro sentido, si se considera esta afirmación de Rómulo Betancourt: "Los gobernantes venezolanos de 1946 estábamos -y estamos- convencidos de que nuestro país no puede saltar la etapa de desarrollo capitalista de su economía. El estadio que atravesamos reclamaba una transformación nacional-revolucionaria y no una ajustada a modelos socialistas, o comunistas".²² (Resaltado nuestro).

Todo ello nos lleva, pues, a afirmar que la posible intervención del Estado en Venezuela, desde un principio, tuvo una fundamentación político-ideológica precisa y los programas de crecimiento económico impulsados por aquel estaba en lo "permitido" por los intereses corporativos de la clase hegemónica capitalista, y la relación entre ésta y la fuerza social (partidista) que se enclava en el gobierno ejerce su decidida influencia en el diseño mismo de la programación a desarrollar, dentro de parámetros definitorios del Estado como "protector y no competidor", tal como lo concibió Fedecámaras en su II Asamblea Anual en 1946.

22 Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo, Edic. cit., p. 378

En este particular, valdría la pena tener presente la concepción que manejó la Junta de Gobierno Revolucionaria -no olvidemos que tenía preeminencia adecuada en su estructuración- sobre esos parámetros del intervencionismo estatal. "Dicho más concretamente -señaló Betancourt-: no se trataba de repetir el "Enriquézcanse" de Guizot a la burguesía francesa, sino de orientar la producción en tres sentidos: 1) estudiando las características de la economía, e impulsando su desarrollo conforme a esas investigaciones técnicas; 2) asumiendo la realización de aquellos programas que, por su magnitud o por no ser halagüeños para la inversión privada, requerían la activa ingerencia del Estado; y 3) estimulando liberalmente, con la ayuda crediticia y técnica, a los hombres de empresa emprendedores y dinámicos..."²³

En este contexto -donde se jugaba la legitimación de un gobierno y la consolidación estructural de un Estado-, ¿Podría sentir, entonces, el sector empresarial temor del intervencionismo del Estado? ¿No se estaba generando, desde la cúpula de lo político, la simbiosis necesaria para una acumulación del capital sin saltos en la transformación económico-social venezolana? ¿No era

²³ Ibidem, p. 379

preferible, en términos de imposición de su hegemonía, concentrar una estrategia política que no llegara a plantearse el enfrentamiento radical de ese intervencionismo?

Por lo menos, en lo que se refería al principal conductor de la Junta de Gobierno, la articulación a los intereses del capital estaba bien clara y definida, y para el gobierno en su globalidad esa fue la pauta a desarrollar en procura de sentar las bases del Estado Capitalista moderno, interés que ya hemos anunciado anteriormente. Desde esta perspectiva gubernamental no podían correr riesgo los intereses del nuevo sector empresarial dominante. Y las propias dudas quedaron disipadas posteriormente con el siguiente discurso: "Por un cúmulo de circunstancias, en pocos países latinoamericanos como en Venezuela, la acción del Estado para estimular y orientar la producción es necesidad imperativa. La potencialidad financiera del Estado, derivada del hecho de que percibe la mayor parte de los ingresos que aporta el petróleo viabiliza y hace insoslayable el cumplimiento de esa obligación. No podía cruzarse de brazos el Estado venezolano a esperar que la iniciativa privada desarrollara y diversificara la producción, porque la tendencia a seguir la vía de menor resistencia en un sector apreciable de los capitalistas criollos, los impulsaba a ser

caseros y comerciantes antes que agricultores o industriales. Tenía que actuar, en consecuencia, como Estado estimulador, financiador y orientador de las actividades económicas que tendieran a hacer más abundante y variada la producción doméstica; y como Estado-empresario, para desarrollar algunas actividades directamente vinculadas al interés público (siderurgia, electrificación, comunicaciones radiotelegráficas y telefónicas, transporte)"²⁴ (Resaltado nuestro).

Sentado ese punto de partida, definición amplia del intervencionismo del Estado en cuanto a su radio de acción y objetivos, resulta ahora pertinente entrar a detallar la posición asumida por Fedecámaras frente a aquella definición, que como hemos visto se plasmó en las medidas económico-políticas de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta posición del máximo organismo empresarial será expuesta a través de las Resoluciones de sus Asambleas Anuales celebradas en 1946, 1947, y 1948, haciendo la salvedad de que ésta última se realizó bajo el marco del breve espacio gubernamental de Rómulo Gallegos.

La II Asamblea Anual de Fedecámaras se realizó en Maracaibo en medio de una gran expectativa en 1946, cuando ya

²⁴ Ibidem, p. 380

estaban en ejecución algunas de las medidas tomadas por la Junta de Gobierno en los planos económicos, políticos y sociales. Así, se había ejecutado la medida de impuesto extraordinario que le reportó al Estado un monto de 100 millones de bolívares; estaba en funcionamiento el Consejo Nacional de la Economía y se consolidaba la idea de la Corporación Venezolana de Fomento, promovida como ente promotor de la ayuda financiera para el desarrollo industrial y agropecuario; se había anunciado y aprobado el "presupuesto más alto de la historia nacional" -como se calificó en el Decreto 369 del 10 de julio de 1946- por la cantidad de 787.109.000 bolívares para el lapso fiscal comprendido entre el 1º de julio de 1946 y el 30 de junio de 1947, fortaleciéndose así las posibilidades administrativas y sociales del propio Estado democrático-liberal;²⁵ y, lo más importante en tanto el perfil de la especificidad política del Estado, se concretaron una

25 En la exposición de motivos del Decreto 364, mediante el cual se aprobó el presupuesto señalado, puede leerse: "Se ha dicho reiteradamente, y con razón, que los presupuestos son los documentos más definidos de los rumbos políticos y administrativos de un régimen. En este sentido, el Presupuesto 1946-1947 precisa y aclara definitivamente el carácter democrático-democracia moderna saturada de la idea de que libertades públicas, justicia económica y social e incremento de la producción, son la trípode donde se asienta todo Estado bien estructurado- del Gobierno actual de Venezuela".

(Tomado de José Rivas Rivas, Ob. cit., p. 96).

serie de reformas políticas (estatuto electoral; elección en Octubre de la Asamblea Nacional Constituyente; ratificación de un estilo político-administrativo acorde con las exigencias del Estado capitalista moderno, etc.) que apuntaron a la legitimación del régimen y a darle fisonomía estructural sólida a ese Estado, único modo de asegurar el despliegue efectivo de una determinada hegemonía.

En ese accionar, que evidenciaba una direccionalidad económico-política ensamblada desde la concepción del Estado como eje intervencionista-benefactor-financiamiento, tiene que ubicarse la posición de Fedecámaras, sobre todo, -en lo que interesa a esta investigación- frente al intervencionismo del Estado, entendido este como mecanismo de distribución del excedente fiscal petrolero, básicamente.

Así, sobre ese particular, en la Resolución de la II Asamblea Anual de Fedecámaras se pueden identificar las siguientes apreciaciones,²⁶ consideradas por nosotros como muestrario de una estrategia política respecto al intervencionismo estatal:

²⁶ Ver FEDECAMARAS, Ob. cit., pp. 57-58

a.- El Problema de la Tierra (subtítulo de la Resolución).

- "Que al llevar a cabo las reformas en la estructura agraria (se refiere a la acción de la Asamblea Constituyente), se proceda en forma que, a la vez que asegure el continuo mejoramiento de las condiciones sociales de los asalariados, tam
bién se le brinde al capital privado amplias posibilidades de actividad para que sus inversiones resulten estables, permanentes y adecuadamen
te remuneradas". (Resaltado nuestro)

b.- Marina Mercante (subtítulo de la Resolución).

- "La Asamblea (de Fedecámaras) manifiesta su complacencia con el propósito gubernamental de fomentar la Marina Mercante Venezolana, que abarque los servicios fluviales, costaneros y de altura, teniendo muy en cuenta que es opinión de la Federación que esta actividad debe dejársele a la iniciativa privada, sin que se establezca monopolio a favor de determinada compañía, para evitar así los dolorosos males que nos ha enseñado la experiencia sufrida.

Además, el Gobierno Nacional deberá prestar toda la ayuda técnica y crediticia que sea necesaria". (Resaltado nuestro)

- c.- Arancel y Aduanas (Subtítulo de la Resolución).
- "Que se proceda en forma definitiva a la Reforma del Arancel de Aduanas en el sentido de que **deje de ser una fuente de ingresos fiscales para convertirse en un instrumento de protección a la producción nacional. Que esa reforma implique una rebaja sustancial, y en ciertos casos hasta una supresión total de los derechos arancelarios para artículos de consumo general...**" (Resaltado nuestro)
- d.- Colaboración entre particulares y sus organizaciones representativas con el Gobierno. (Subtítulo de la Resolución).
- "Esta Federación, integrada por representantes legítimos de todas las Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del país, (...) y como tal, en función responsable le corresponde, en servicio de la colectividad, emitir opiniones y evacuar las consultas de orden económico social oportunamente cualquier gobierno venezolano realmente democrático había de requerir de ella; así como ofrecer su eficiente y decidida cooperación al progreso de la economía nacional. Con vista a ésta, su fundamental finalidad, ha reclamado la creación y ahora cooperará en la organización

del Consejo de Economía Nacional, cuya inmediata instalación ha dispuesto el actual gobierno. Asimismo y procurando obtener la gradual y progresiva coordinación de los intereses comerciales, industriales y financieros y de acción gubernamental (...) Se resuelve que la Federación estudiará y proyectará prontamente la Constitución del Consejo Nacional de Comercio Exterior... Estos importantes organismos, junto con el Instituto o Corporación de Fomento, que próximamente será creado, juzgamos que la integrarán y aportarán una valiosa cooperación de la iniciativa privada al Gobierno para el desarrollo de nuestra Economía". (Resaltado nuestro)

e.- El Estado Protector y no competidor. (Subtítulo de la Resolución).

- "El Estado no debe competir con los particulares en empresas de la producción. (...)"

f.- Técnica y Crédito Proteccionista ofrecidos por el Estado (Subtítulo de la Resolución).

- "La Federación reitera sus deseos de ver pronto en funcionamiento el Instituto Permanente de Crédito a la producción, para financiar no sólo la

pequeña industria, sino las grandes empresas cuya producción en gran escala será uno de los medios para abaratar los costos de producción y mejorar el nivel de vida de las clases trabajadoras del país". (Resaltado nuestro)

g.- Paz Industrial. (Subtítulo de la Resolución).

- "Que el gobierno trata de propender a una armonía entre el Capital y el trabajo en el sentido de hacer las relaciones cordiales entre patronos y obreros, estimulando las justas reivindicaciones sociales y económicas de éstos, y a la vez imprimiéndole confianza a los industriales para el normal desarrollo de sus actividades". (Subrayado nuestro).

h.- Estímulo a la Iniciativa Privada. (Subtítulo de la Resolución)

- "Que la iniciativa privada sea estimulada por un clima de normalidad institucional, elevando el ánimo de los industriales la confianza requerida para el desarrollo de sus actividades". (Resaltado nuestro).

i.- Ministerio de Industria y Comercio.

- "Esta Federación se pronuncia por la creación del Ministerio de Industrias y Comercio, que estimule con técnica y financiación del esfuerzo venezolano a acrecentar la producción nacional que es aumento de riquezas para todos". (Resaltado nuestro)

j.- Inversión de Capitales Extranjeros. (Subtítulo de la Resolución).

- "Esta Federación, ratificando su política económica antimonopolista, recomienda al Gobierno Nacional brindar al Capital extranjero las mayores seguridades en sus inversiones en Venezuela, siempre que éstas sean reproductivas para el país y no lesionen la economía interna, legislando disposiciones reguladoras llegado el caso". (Resaltado nuestro)

Como se puede observar, estos postulados conforman un discurso coherente que ordena una determinada relación de los intereses del sector empresarial con el Estado y no son, justamente, exposición de criterios que definan una posición contraria al intervencionismo de aquél. Al contrario, hay una aceptación implícita del

mismo como elemento clave para la imposición y reproducción de unas relaciones de producción determinadas y como conformador de un espacio político que se legitima a partir del beneficio que aporta el ordenamiento del interés particular-privado (donde se asientan las relaciones de producción basadas en la explotación de un sector social por otro -el que controla los medios de producción y la apropiación de la plusvalía-), como interés general.

Es decir, a mayor capacidad del Estado de representar en términos abstractos el contenido de relaciones sociales concretas, mayor será su propia conformación como relación de fuerza que legitima y reproduce un dominio específico. De allí, en consecuencia, que no puede la burguesía, como fuerza social dominante en aquella relación política, esgrimir un proyecto que sea de por sí anti-Estado o que haga desaparecer la posibilidad de legitimación de aquel frente al otro factor fuerza, los sectores sociales dominados.

No se puede olvidar que en el plano estrictamente económico el excedente petrolero en sí mismo no es Capital. Para que él pueda tener alguna presencia en las relaciones sociales hay que convertirlo en Capital, es decir, concreción del proceso productivo como tal. Y ello

no solamente implica ser financiador-inversionista, sino que se requiere además que el Estado, como ente receptor y distribuidor de aquel ingreso fiscal, garantice cierta normalidad institucional y un clima de entendimiento entre Capital-Trabajo, de tal manera, que las posibles expresiones huelgarias o conflictivas por parte de los trabajadores sean minimizadas en resguardo de los niveles de ganancias del capitalista.

A ello se le suma, en lo que se refiere a la estructuración burocrático-funcional del Estado, las iniciativas del sector dominante de participar directa o indirectamente en la planificación de las decisiones económico-administrativas que aquel toma; sin que ello se entienda como imposición absoluta de su único interés o que se violente -en nombre de la hegemonía de clase- la autonomía relativa del Estado.

En aquel discurso de Fedecámaras para 1946 es posible encontrar reflejada la aspiración de la organización empresarial venezolana dentro de aquellos parámetros: alusión al interés general, al mejoramiento social de los trabajadores, a la elevación del nivel de vida del país; exigencia de la participación en los organismos consultores-planificadores del Estado (Consejo Nacional de Economía, Corporación Venezolana de Fomento, etc); solicitud de paz laboral; de condiciones propicias para la

inversión de capital, etc. Todo ello concebido como estrategia política para sentar bases definitivas para la simbiosis con el Estado "benefactor, financiador y protector", en función de una hegemonía de clase, que no es posible implantar fuera del espacio político legitimador que el Estado reproduce con su acción burocrático-administrativa.

Esta afirmación, por supuesto, no descarta que algunos sectores tradicionalistas de la clase capitalista, mantengan aún sus raíces ideológicas en el liberalismo clásico y reclamen una posición contraria al intervencionismo del Estado. Aún cuando, estamos convencidos de que ese mismo clamor, a lo sumo, exige limitación, pero no aspira a una eliminación total de aquel, ni siquiera en nombre del cauce "natural" del hecho económico-político en una economía realmente de libre competencia.

Es de advertir que la posibilidad misma de que se presente esa posición "anti-intervencionista" en una fracción de clase determinada podría estar movida por el hecho de que aquella considere que cierta direccionalidad (inversión, proyectos nuevos, fortalecimiento financiero a un sector X de la economía más que a otro, etc) del intervencionismo del Estado podría estar favoreciendo en mayor grado a otra fracción (comúnmente se

le califica como burguesía emergente). Y, aún así, la posición no puede entenderse como anti-intervencionista sino más bien como punto de defensa frente a la variabilidad de la hegemonía de clase que controla a su favor esa capacidad interventora del Estado. Es decir, aquí se juega el desplazamiento o no de la hegemonía política particular de una fracción específica de la clase dominante -y su discurso coyuntural puede ir a plantear un mayor o menor intervencionismo del Estado-, pero no la hegemonía de la clase como tal, posible, en el caso venezolano, a partir de su relación como unidad clasista con el Estado. Este, al fin de cuenta, legitima (tanto en la Democracia como en la dictadura militar) en el marco de una racionalidad instrumental propia de la lógica del capital.

Desde esta última apreciación, ¿Será "rentable" que el poder económico rompa con esa estrategia política, básica para la hegemonía política de la clase? Nuestra respuesta es negativa. No se puede olvidar que, a partir de las mediaciones del Estado, tiene mayor significación afianzar el poder económico-político sobre las relaciones sociales totales (dominación del pueblo), que el hecho mismo de resolver la contradicción que se pueda presentar entre fracciones de la clase dominante por imponer su hegemonía política particular al resto de la

clase como totalidad. Y eso tiene una explicación fundamental: la clase dominante es tal, tan sólo en la medida que logre mantener la relación de fuerzas que se expresa en el Estado a su favor, con predominio de sus intereses. De allí que su poder-fuerza, por ejemplo, en la lucha de clases tiene que ser significativo y efectivo. "En efecto -señala Poulantzas, en un planteamiento teórico a tener presente sobre nuestra última afirmación-, en el marco de ese Estado (moderno capitalista), toda parcela de poder económico-social desplazada de la clase dominante a las clases dominadas vale por lo que es, o sea que disminuye "automáticamente" el poder detentado por la clase dominante".²⁷ Por ello, la importancia de mantener la unidad de clase (dominante) en el Estado. Ella misma es conformación efectiva de hegemonía política, en consecuencia, hay que ser coherente, en tanto, la estrategia de relación simbiótica con el intervencionismo del Estado demuestra claridad política del poder económico. La misma organización de Fedecámaras se inserta en esa claridad.

Así, por lo menos, en la evolución del mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Fedecámaras mantuvo

²⁷ Nicos Poulantzas, Ob. cit., p. 67

vigente su discurso frente al intervencionismo del Estado. Revisemos.

Para 1947, la Junta Revolucionaria de Gobierno mantuvo la continuidad de sus reformas económicas, políticas y sociales, en la pauta descrita de sentar pilares para la consolidación del Estado Capitalista. Así se amplió la imposición de impuesto a la industria petrolera, la cual, al aumentar su producción, contribuyó a elevar los ingresos del Estado en 815 millones de bolívares para ese año; sobre esa base, el presupuesto de la nación para 1947 fue de 1.315 millones de bolívares, captándose para su conformación -según cifras aportadas por Rómulo Betancourt-²⁸ un 63% de ingresos por concepto de renta petrolera y por tasas impositivas a las empresas nacionales con elevadas ganancias y el 37% restante por los impuestos pagados por los ciudadanos; se conformó la estructura organizativa de la Corporación Venezolana de Fomento, la cual, en ese primer año de funcionamiento efectivo aportó al sector privado créditos por un monto de 84 millones de bolívares. Más un aporte de 49 millones de bolívares para el fomento de la producción de productos alimenticios básicos, y desarrolló planes econó-

²⁸ Ver Rómulo Betancourt, *La Verdadera Historia de la Revolución de Octubre 1945*, Edic. cit, pp. 82-85; Venezuela, *Política y Petróleo*, Edic. cit, pp. 344-345.

nicos bajo la modalidad de empresas mixtas y de administración directa, en la que se invirtieron tan sólo en 1947 más de 100 millones de bolívares, etc. En síntesis, una gran movilización del excedente fiscal petrolero dirigido a conformar Capital, en la que, la mayor parte se presentaba como crear condiciones favorables para el crecimiento económico dentro de cánones netamente capitalistas.

También es altamente prometedor -para los efectos de la consolidación del Estado y la legitimación de una determinada hegemonía- el auspicio del propio gobierno de la organización sindical de los trabajadores, dándole importancia crucial a la Confederación de Trabajadores de Venezuela -bajo el control de Acción Democrática-, como instrumento adecuado para proponer el reformismo laboral que garantizara la armonía entre los factores del proceso productivo. Esta política "laboral" fue tan productiva, en términos de control ideológico del movimiento obrero, que durante el período (1948) de Rómulo Gallegos, la propia dirigencia de Fedecámaras se jactaba de la "paz laboral", y ante una crisis coyuntural de precios, abastecimiento y solicitud de aumentos de sueldos en el segundo trimestre de ese año, la propia CTV le propuso oficialmente a la organización empresarial un acuerdo para "dirimir diferencias" en resguardo de la paz social.

Por la importancia de tal posición, reproducimos a continuación el resumen de aquel acuerdo que inserta Betancourt en "Venezuela, Política y Petróleo": "a) protección a la industria nacional; b) contratos colectivos de larga duración, como base de buenas normas contractuales, económicas y sociales; c) introducción en los contratos colectivos de una cláusula garantizando empleo preferencial a los afiliados a la C.V.T. (cláusula que tenía como objetivo político desmembrar los sindicatos dirigidos por el Partido Comunista de Venezuela u otras agrupaciones opositoristas), y d) creación de un organismo central mixto para dirimir las diferencias que surgieran entre patronos y trabajadores y asegurar así la paz social".²⁹ (Resaltado nuestro)

¿No coincidía tal contenido con la solicitud expresada por Fedecámaras en su Resolución de 1946 relativa a que el Estado propendiera a "una armonía entre el Capital y el Trabajo" como elemento que inspirara confianza "a los industriales para el normal desarrollo de sus actividades".?

En el lado correspondiente al plano estrictamente político, a principios de 1947 se da una gran efervescencia electoral por la decisión de realizar en Diciembre

²⁹ -----, p. 362

de ese año las elecciones generales para Presidente de la República y los Cuerpos Legislativos del Estado. Movimiento de vital importancia para fortalecer en la conciencia nacional la necesidad del proyecto democrático-liberal, sin negar la raíz estructural del elemento electoral en sí mismo como lo es la legitimación del gobierno y del Estado. De esas elecciones salió electo como Presidente de la República DON Rómulo Gallegos. Así mismo, en otro plano, en Marzo de ese año se realizó la III Asamblea Anual de Fedecámaras.

El marco de esta reunión de la Organización empresarial, llevada a cabo en Caracas, siguió siendo el avance de la legitimación del Estado con la ejecución de medidas económico-políticas bajo patrones capitalistas y abrazando una distribución del excedente fiscal en dirección de garantizar las condiciones propicias para que el sector empresarial privado conformara niveles de acumulación de capital a partir del despliegue eficaz del intervencionismo estatal. El carácter que asumiría tal imbricación para el lapso global de 1945-1948 proyectaba en toda la estructura nacional una relación de fuerza, mantenida bajo la hegemonía de la clase capitalista, que por racionalizar la instrumentalidad social desigual³⁰ se

³⁰ Esta racionalización del contenido político real del Estado puede encontrarse explícitamente en la siguiente concepción: "El Estado en Venezuela, sin la menor

rá asumida por esta clase como parte constitutiva del proyecto de consolidación del Estado, incluso, frente a posibles variaciones coyunturales de gobierno y más allá de una simple determinación economicista.

De nuevo, la revisión sistemática de las posiciones de Fedecámaras -en este caso, las tomadas en 1947- arrojará luces sobre el mantenimiento de la estrategias políticas que relaciona el interés de clase hegemónica con el propio intervencionismo del Estado, obviamente, con la finalidad de asegurar una cuota de poder predominante en la toma de decisiones del Estado. Veamos.³¹

a.- Protección a la Industria Nacional (Subtítulo de la Resolución)

- "Declarar que por industrias nacionales se entienden todos aquellos establecimientos radicados en Venezuela que apliquen capital, técnica y esfuerzo de trabajo a la preparación, elaboración, transformación y producción de artículos de consumo sin discriminación del origen de las mate-

duda, es la organización política de la sociedad, y como tal, el instrumento de la sociedad para el logro de los objetivos plasmados en el pacto político constitucional: el bien común, la justicia social y el respeto a la dignidad humana". (Allan Brewer Carías, "Las Reformas del Estado", en *Sobre la Democracia*, Caracas, Edit. Ateneo de Caracas, 1979, p. 177)

31 Ver el contenido completo de la Resolución de la III Asamblea Anual de Fedecámaras (1947) en FEDECAMARAS, Ob. cit., pp. 69-76.

rias primas utilizadas. Todas las industrias nacionales merecen la debida protección (del Estado) y preferentemente aquellas industrias que usen parcial o totalmente materias primas nacionales". (Resaltado nuestro)

b.- Crédito Industrial. (Subtítulo de la Resolución)

- "Desarrollar y afianzar un sistema eficiente de crédito industrial suficiente, con una parte de los ingresos del Estado..." (Resaltado nuestro)

c.- Escuelas Técnicas. (Subtítulo de la Resolución)

- "Urge la mayor colaboración entre el Estado y los particulares para la creación y el fortalecimiento de escuelas de capacitación técnica, industrial y artesanal...". (Resaltado nuestro)

d.- Banco Hipotecario Urbano. (Subtítulo de la Resolución)

- "Urge la creación de un Banco Nacional Hipotecario Urbano, con privilegios propios de su característica para que ese Banco llene en escala nacional, las inaplazables necesidades crediticias que servirán poderosamente para fomentar el desarrollo de la industria de la construcción... A tal efecto, la Federación y los organismos fe-

derados le brindan al Gobierno Nacional todo su concurso..." (Resaltado nuestro)

e.- Liberalización de los Controles y Restricciones Administrativos.

- "Es necesario para evitar entorpecimientos y tratos discriminatorios, perjudiciales al proceso de la producción y del comercio para alentar el espíritu de empresa y la iniciativa individual creadora de trabajo y de riquezas. Esa intervención estatal y las regulaciones, trabajo y de riqueza, no se deben aplicar, sino cuando lo exijan razones suprémas de interés nacional, y deben hacerse siempre con el máximo de garantía, previa consulta a las entidades representativas del comercio y de la producción". (Resaltado nuestro)

f.- Ley del trabajo, las relaciones obrero-patronales y la Economía del país. (Subtítulo de la Resolución).

- "PRIMERO: Propiciar y apoyar una política social (por parte del Estado) que responda, real y efectivamente, a la participación del capital y el trabajo en el proceso de la producción..."

SEGUNDO: Repudiar toda política obrera que pretenda resolver el arduo problema social endosando a los empresarios y patronos el gravamen de aquellas reivindicaciones que de suyo correspondan a la función del Estado..." (Resaltado nuestro)

TERCERO: Pronunciarse en contra de la extralimitación de la intervención ejecutiva en los conflictos del trabajo; y en contra de que los fallos arbitrales puedan establecer prestaciones no previstas por la Ley". (Resaltado nuestro)

OCTAVO: Pronunciarse enérgicamente contra la habilitación política de los sindicatos y demandar que este precepto sea rigurosamente mantenido (por el Estado) como norma política, social y económica". (Resaltado nuestro)

En comparación con los postulados de 1945-1946 no hay gran variación en este discurso de Fedecámaras, comprensible, si se acepta que la evolución del Estado se mantiene cruzada por una relación de producción capitalista. No obstante, algunas posiciones vienen a corroborar el planteamiento teórico sobre la negación de la identidad total entre Estado-clase dominante,³² sobre to

³² En su obra "El Estado en el desarrollo y la integración de América Latina", Marcos Kaplan, al igual que Poulantzas, insistió en este postulado: "Rara vez o nun-

do; porque en aquel muestrario praxístico de Fedecámaras también se encuentran algunas afirmaciones que reflejan cierta contradicción con algunas iniciativas del Estado, aun cuando, ellas se articulan luego a la aceptación y solicitud de la propia autoridad del Estado para que resuelva los posibles actos que ocasionen tales posiciones encontradas. En otras palabras, la contradicción (no antagónica) se resuelve por la misma recurrencia al intervencionismo, lo cual, de hecho, confirma a éste como expresión estructural de la dinámica social en su totalidad.

De qué otra manera podría comprenderse la solicitud de Fedecámaras de solicitar protección para las industrias nacionales, de reclamar un sistema de crédito industrial sostenido como parte de los ingresos del Estado; de dejar sentado que el intervencionismo estatal debe hacerse sólo en nombre del "interés nacional", pero con "previa consulta" del sector empresarial, y, lo que es más significativo, llegar a "repudiar", a "pronunciarse en contra" de cualquier política obrera que tienda a cuestionar su responsabilidad en la crisis social, y remitir, al mismo tiempo, el logro de las reivindicaciones sociales a las "funciones del Estado". En

ca puede existir, una identificación absoluta e incondicional entre el Estado y una clase, ni subordinación mecánica e instrumental del uno hacia la otra; y todo Estado debe responder también, siempre, en cierta medida, a necesidades e intereses generales de la sociedad". (-----, citado por Allan Brewer Carías, "Las Reformas del Estado", en Sobre la Democracia, Edic. cit, pp. 178-179)

otras palabras, el intervencionismo es criticable, para el sector empresarial, si afecta demasiado el interés privado, pero, de todos modos, es necesario recurrir a él para conformar un Estado que, al mismo tiempo que responda a la hegemonía del poder económico privado, pueda legitimarse frente al resto de la población cumpliendo con ciertas expectativas exigidas por éstos. En tal caso, esa es la visión que se desprende de las posiciones de Fedecámaras y de allí que la consideremos como estrategia política fundamental en la instalación de su proyecto hegemónico en la formación económico-social venezolana.

Para una comprensión más precisa de este planteamiento hay que tomar en cuenta que la dominación dentro del Estado Capitalista moderno no es ya la única y simple instrumentación de un proyecto-fuerza amparado en un aparato coercitivo -la vieja interpretación marxista del Estado como aparato represivo de la clase dominante-, sino que hay una predominancia del manejo ideológico para establecer un espacio social anclado en el consenso social. En principio, en ese espacio se definen intereses políticos y, como tal, conjuga una expresión cabal de ejercicio de hegemonía debido a que allí se juega cierta capacidad de dirigencia histórica una clase social determinada.³³

³³ Ver Alfredo Ramos Jiménez, "Crisis de Hegemonía y Proyecto Tecnocrático en Venezuela", en Venezuela, un sistema Político en Crisis, Edic. cit, pp. 113-115.

Ahora bien, aquella confirmación del propio intervencionismo estatal en el discurso de Fedecámaras, se hace en términos de relación de fuerzas, por cuanto, la misma no significa que el Estado sea la encarnación de la "justicia social", ni menos el "instrumento" de tales clases en función de establecer el interés general. Es de entender, la posibilidad innegable de que el Estado responda a intereses globales de la sociedad como elemento legitimador de su acción y, con ello, como ordenador de una relación hegemónica sobre intereses de clases definidos no solamente por el papel que tienen en las relaciones de producción, sino en la viabilidad misma de un cierto espectro ideológico-político que tiende a presentar el dominio como patrón constitutivo normal del Estado y de todas las relaciones sociales en general.

En la medida en que el Estado le marca pauta limitante a los intereses del sector capitalista hegemónico, lo que hace es fortalecer la relación de fuerza que encarna a favor de éstos, debido a que esa misma legitimación de autoridad se refleja en los demás estratos sociales como expresión simbólica de un Estado que está por "encima" de los intereses particulares. De hecho, la burguesía recurre al propio Estado para compactar su relación con el resto de las fuerzas sociales. Por supuesto, no lo hace de manera gratuita: lo hace en procura de reproducir orgánicamente desde y dentro de aquél su hegemonía política de clase.

La legitimación del Estado deviene en consecuencia del establecimiento de aquella "voluntad colectiva general", la cual, en buena parte, es resultado, a su vez, de la racionalidad de las relaciones de poder, de la aceptación natural de un ente que administra el dominio en nombre de la razón colectiva percibida como bien común, cuando en efecto, no es más que la trama de una reconciliación de la fuerza social popular (mayoritaria) con el poder de la minoría hegemónica.

A pesar de no ser nuestro objetivo profundizar en esta dirección, vale la pena introducir esta apreciación: la legitimación del Estado en el Capitalismo es una racionalidad impuesta por la clase dominante sobre la base de la irracionalidad del contexto social, ya que, por encima de indiscutibles diferencias sociales opera el símbolo de la igualdad (de la soberanía popular) que, supuestamente, encarnaría el Estado. Visto desde la perspectiva del Estado como relación de fuerza, aquel sector que controla la forma ideológico-jurídica de la razón instrumental, que no es otro sino aquel anclado en las relaciones de producción bajo la lógica del capital, tendrá mayores posibilidades de imponer su hegemonía al resto del colectivo social. El Estado es, pues, centro de disputa de hegemonía política, de posibilidad real de ejecutar un proyecto de poder.

Tanto es así, que el problema de la crisis política en un Estado determinado estaría planteado en los siguientes

términos: "De acuerdo con Gramsci -señala el politólogo Alfredo Ramos Jiménez-, los proyectos hegemónicos entran en crisis cuando se produce una de estas situaciones: 1) Cuando la clase hegemónica pierde el apoyo requerido de las masas que se había logrado o impuesto bajo la forma de consenso; o 2) cuando las masas pasan imprevistamente de la pasividad política a una cierta actividad capaz de imponer reivindicaciones que exigen un cambio revolucionario de la sociedad".³⁴ Explícitamente, cuando hay una clara disputa del poder; ratificándose así -en el enfrentamiento político concreto- la relación de fuerzas condensada en el Estado.

Por cuanto no creemos en la ingenuidad política de la clase capitalista dominante. Nos atrevemos a asegurar que ésta asume plenamente el hecho insoslayable de que el Estado propicie y ejecute un determinado nivel de respuesta social en la distribución del excedente fiscal correspondiente, simultáneamente con la preservación de las condiciones para la reproducción del capital y la base del dominio de clase. Y frente a ese hecho, que no es más que la dinámica que procura conformar un equilibrio de fuerzas -así deviene una función orgánica cuya finalidad es evitar que se violente esa misma contradicción del Estado-, el sector que mantiene la hegemonía tiene que permanecer vigilante, atento, tanto

³⁴ *Idem*, pp. 118-119

ofensiva como defensivamente, incluso, dentro de una postura que no logre poner en duda, frente al colectivo social, la autonomía relativa del Estado.

Suponemos que esa actitud es mayormente acentuada en el proyecto de Democracia Representativa, debido a que éste presupone un sistemático reclamo popular para lograr la satisfacción de necesidades básicas y, por ende, implica una ampliación más eficaz de la legitimación estatal mediante la apertura de canales de participación política y de distribución de la riqueza social. De allí el inusitado interés del poder económico capitalista de precisar "reglas del juego" con el Estado democrático en atención a sus aspiraciones hegemónicas, por cuanto, este mismo proyecto, al legitimarse sobre la base de una supuesta igualdad que lo informa, puede generar, contradictoriamente, una conciencia social impugnadora del sistema en su totalidad. Es decir, el dilema reforma o revolución puede cristalizar a favor de la última, de una posible crisis de hegemonía dentro del proyecto democrático, a pesar de que mucha gente piense que el afianzamiento del Estado capitalista, bajo la modalidad de Democracia Representativa, clausura cualquier posibilidad de impugnación radical del mismo por parte de los sectores populares; criterio propio de los que creen en la perdurable eficacia de la racionalidad burocrática que le endilga al Estado imparcialili

dad frente a los conflictos entre las clases, en la lucha por el poder.

Frente a esa posibilidad real, la hegemonía opera a conciencia.³⁵ No debe haber espacio para el error, ya que, cuando éste se presente, bajo condiciones subjetivas favorables de los sectores dominados, ese proyecto hegemónico puede estallar. Precisión es lo particular del sector empresarial y ello funciona como clave en sus estrategias políticas...

Por lo menos, en el contexto histórico, que estamos analizando (1945-1948), Fedecámaras se movió en esa dirección: una vez que la Junta Revolucionaria de Gobierno cumplió con el ofrecimiento político de legalizar, a través de elecciones generales, el proyecto democrático-liberal, la organización empresarial creyó conveniente -y en consecuencia actuó- fijar una posición detallada de sus aspiraciones económico-políticas frente al inicio real de la Democracia Representativa concretado con el ascenso de Rómulo Gallegos a la presidencia de la República, el 15 de febrero de 1948.

³⁵ En un planteamiento casi olvidado, en "la Ideología Alemana" de Marx y Engels puede apreciarse lo siguiente: "Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión..." (-----, La Ideología Alemana, Argentina, Edic. Pueblos Unidos, 1975, p. 51)

Así, en el seno de la IV Asamblea Anual de Fedecámaras celebrada entre el 1-3 de Marzo de ese mismo año, se aprobó la Carta Económica de San Cristóbal.³⁶

En este documento, en principio, el empresariado nacional ratificó un conjunto de sus intereses particulares sin dejar de presentarlos como "justos anhelos e intereses de las colectividades" como se desprende del enunciado de los objetivos básicos de aquel: lucha contra el pauperismo ("por principios de solidaridad humana y de sentimiento patriótico..."); aumento de la renta o ingreso nacional ("para favorecer el aumento de la renta de la colectividad venezolana..."); desenvolvimiento de las fuerzas económicas ("en procura del aumento del ingreso nacional..."); democracia económica ("A la democracia política, que es vocación de los venezolanos, debe corresponder una verdadera democracia económica"); justicia social ("que permita el trabajo armónico y la recíproca distribución de responsabilidades, la justa división de derechos y deberes y una creciente participación de todos los ciudadanos en la riqueza común").

Tal intención de seguir desarrollando un discurso ideológico que asentara el interés particular de clase como interés general, como fundamento de "la nación",

³⁶ Ver FEDECAMARAS, Ob. cit., pp. 84-102

etc, redimensiona la estrategia política de Fedecámaras en el contexto de la incipiente Democracia Representativa, debido a que la finalidad era legitimar un proyecto hegemónico a partir de una relación estatal que también estaba obligada a responder a cierta participación popular, sobre todo, si se considera la misma condición histórica que cualifica la modalidad del Estado capitalista moderno para ese momento: una gran movilización del factor político como elemento de desmonte de la trama autocrática gomecista y de la limitada democracia del post gomecismo.

No se puede negar que el esfuerzo de la Junta Revolucionaria de Gobierno había demostrado la viabilidad de la Democracia, independientemente, de que por la propia naturaleza de las relaciones de producción que contribuyó a reproducir, haya mostrado una limitada respuesta frente a las demandas populares y que su mayor esfuerzo haya sido intentar consolidar el Estado a partir de la garantía de condiciones favorables para la reproducción del Capital y, en consecuencia, de la legitimación política de una hegemonía determinada, la cual impregnó con su lógica instrumental y sus intereses todo el ordenamiento jurídico-institucional del proyecto democrático.

Esta última idea es básica para entender las líneas de legitimación que procura la clase dominante en el

seno del sistema democrático, debido a que por la propia movilización política que éste reclama -a pesar de la carga de alienación que se le impone al acto político ejercido por los sectores dominados-, aquella no puede apelar irracionalmente al ejercicio puro de la simple represión, aún cuando, tampoco pueda prescindir totalmente de ésta. "Toda clase dominante -señala Teodoro Petkoff- ejerce sobre las dominadas una 'dictadura', sin que ello implique necesariamente que el Estado que la cristaliza deba expresarse a través de gobiernos autocráticos o debe presidir un régimen completamente antidemocrático".³⁷

En síntesis, la finalidad objetiva de la clase que despliega el dominio es reproducir su asentamiento político, pero sin descuidar el hecho mismo de que la Democracia como forma de Estado es menos cerrada políticamente, por ejemplo, que un régimen de dictadura militar, lo cual implica que esa clase se sienta obligada a definir explícitamente en el contexto democrático, sus aspiraciones económico-políticas, so pena de perderlo todo en una crisis de hegemonía. No es casual, como ya lo hemos afirmado, que los documentos más amplios e importantes de Fedecámaras en sus primeros 25 años, se hayan producido justamente en los inicios o intermedios de los re-

37 -----, "Democracia y Socialismo", en Sobre la Democracia, Edic. cit, p. 42

gímenes democráticos: "Carta de San Cristóbal" en Marzo de 1948 (Rómulo Gallegos); "la Declaración Económica de Barquisimeto" en 1958 (Junta de Gobierno-prodemocrática); "La Carta de Mérida", en 1962" (Rómulo Betancourt), y el "Documento XX Aniversario" en 1964 (Raúl Leoní).

Así, en lo que respecta a la estrategia política montada sobre la relación con el intervencionismo del Estado, base de la imposición de la hegemonía de clase, en la Declaración de Principios de la Carta de San Cristóbal se puntualizó lo siguiente:

I.- Orden Económico (Subtítulo de la Declaración).

1. "Fieles a su formación histórica y a los compromisos de política internacional asumidos por Venezuela, (los sectores económicos) reconocen que el orden económico venezolano se funda en el principio de libertad y en la primacía de la iniciativa privada, (...) como único medio de garantizar la posibilidad de una existencia compatible con la felicidad y con la dignidad humanas". (Reslatado nuestro)
2. "Ese pensamiento no excluye la admisión de un cierto grado de intervención del Estado impuesto por necesidades comprobadas en ciertos casos y prudentemente contenida en los modelos de un vasto planeamiento de

articulación racional de las fuerzas productoras, bajo la forma de un eficaz estímulo a las entidades económicas que concurra a auxiliarlas facilitando su organización y brindándoles asistencia técnica. Al Estado corresponderá una adecuada acción supletoria, extensiva al campo social, siempre que las iniciativas requeridas sobrepasen el poder, la capacidad o la conveniencia de la empresa privada". (Resaltado nuestro)

3. "Aparte de estos casos, la intervención del Estado en la economía nacional, sólo se justifica en aquellos que se relacionan con la seguridad interna o externa o con el bienestar común".
4. "Estiman preferible la forma indirecta de acción del Estado, tendiente a crear condiciones favorables para el desarrollo de las actividades privadas. En los casos de acción directa, el Estado consultará previamente a los sectores económicos interesados, atenderá la situación de los consumidores y siempre que sea posible dará al capital particular intervención en la empresa y en la dirección". (Resaltado nuestro)

En estos textos, donde vuelve apreciarse una posición no anti-intervencionista de Fedecámaras, se puede

precisar cómo entre postulados relativos al "logro de la felicidad" y de "la dignidad humana" -preceptos que suponen una identificación con el bienestar y la realización del hombre en general, imposibles de lograr bajo relaciones de producción ancladas en la alienación-, la organización empresarial fija los criterios bajo los cuales debe moverse la intervención del Estado, lo que implica una aceptación del mismo, y para ello apela a la valoración de las necesidades de un supuesto bien común, sin dejar de exigir la privatización de la economía en simbiosis con la renta petrolera y la práctica de una obligada consulta antes de las tomas de decisiones implícitas en la ejecución de las políticas económico-sociales del Estado.

A todas luces, esas definiciones in extenso no son más que la ratificación precisa, en el marco del proyecto democrático formalizado cabalmente con Gallegos, del conjunto de intereses privados que amparados en la capacidad de intervención del Estado moldearían el desarrollo del capitalismo en el país.

Ello, por supuesto, tiene una explicación política innegable: "En efecto -afirmaron en una oportunidad los creadores del marxismo clásico-, cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes que ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que

persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, expresando esto en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta".³⁸

Salvando la distancia histórica, probablemente, aquellos respetados analistas hubieran mostrado sorpresa frente a la manera tan explícita de como Fedecámaras, en representación de la clase capitalista, ordena la direccionalidad de su ideología y su acción para establecer una relación política primordial para el despliegue efectivo de su hegemonía como lo es su participación en el dominio político del Estado. Es inocultable, en consecuencia, una estrategia de poder que impone una ordenación precisa de un modo político de proceder en términos de la dominación, la cual rebasa así el espacio de lo económico para impregnar lo político-ideológico.

De este modo, la hegemonía de la clase capitalista funda una relación de poder que impone al colectivo social una identificación con los intereses del polo dominante, llegando a encarnar material y espiritualmente la representación simbólica del Estado frente a la socie-

³⁸ Marx-Engels, *La Ideología Alemana*, Edic. cit., p. 52

dad. El poder, el Estado, deviene en lo "natural", en lo propio y necesario para lograr la "organización" social. Así se cumple la estrategia de orden procurada por la propia relación hegemónica. En el contexto nacional, Fedecámaras como expresión de la unidad política del sector empresarial, ha tenido presente este proyecto, independientemente, de que lo exteriorice en la práctica política concreta a través de la mediación de algunos partidos políticos o individualidades orgánicas a aquel poder.

En síntesis, la presencia significativa de Fedecámaras en el sistema económico-político nacional construida a partir del trienio 1945-1948, es muestra palpable de que cruzó al desarrollo del Estado Capitalista con su hegemonía y ello, a su vez, indica el despliegue efectivo de una política propia inserta en la estrategia de no ir en contra del intervencionismo estatal, sino la de establecer, a partir de una relación simbiótica con éste, una articulación de fuerzas disímiles con sus propios intereses de clase, racionalizando así el consenso social, soporte de la modalidad del dominio en el Estado Capitalista moderno.

Tanto es así, que en la variación de la forma del Estado sucedida a raíz del golpe militar que derrocó a

Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, apenas cumplido diez meses de su gestión en los que sólo pudo mantener la política económico-social desarrollada por la Junta Revolucionaria de Gobierno, no se modifica la hegemonía misma, al contrario, parece ser que ésta también encontró en la dictadura militar el mecanismo ideal para seguir acentuando el poder capitalista. De hecho, la relación de Fedecámaras con el intervencionismo estatal siguió su cauce natural: la reproducción del capital como función de la capacidad rentista del Estado. ¿Podría pensarse en una alteración de esta relación si el intervencionismo del Estado no estaba planteado en términos de modificar la hegemonía de la clase dominante? ¿No fue la dictadura militar un reordenamiento socio-político destinado a evitar, justamente, que esa hegemonía entrara en crisis?

En las páginas siguientes abordaremos las respuestas a estas interrogantes, pero antes queremos indicar un parámetro orientador: no hay fuerzas sociales en abstracto -salvo para efectos de elaboraciones categoriales, sino que las mismas se constituyen en el ejercicio real de relaciones de clases determinadas. El Estado mismo se mantiene por encima de sus "modalidades" debido a la relación de fuerzas que cristaliza en su seno. Cuando

esta relación de fuerza concreta la ofensiva de un proyecto contrahegemónico realmente transformador, el Estado como tal debe también estallar.

Mientras eso no ocurra, entre "modalidades" abiertas o cerradas, en términos de participación política, permanecerá el propio símbolo del Estado como algo que está "por encima" del bien y del mal. Como un nuevo ídolo, de los muchos que abundan en la sociedad alienada.

2. FEDECAMARAS Y EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO (1948-1958).

El proyecto democrático que se pensó tomaría mayor repunte en el período de Rómulo Gallegos, por cuanto, todo parecía indicar que se fortalecería un sistema de Partidos como sustrato de tal proyecto,³⁹ fue truncado por un golpe militar el 24 de Noviembre de 1948, apenas finalizando el primer año de aquella gestión.

³⁹ A principios de 1946 se fundaron los Partidos COPEI y URD, de importante participación en la vida política nacional. Así mismo, en los procesos electorales realizados en 1946 (Asamblea Nacional Constituyente); en 1947 (Presidente de la República, Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales del Distrito Federal y de los Territorios Federales); y en 1948 (Concejos Municipales de los Estados), participaron cuatro Partidos Nacionales: AD, COPEI, URD y PCV.

Este asalto al poder por vía ilegítima literalmente se puede inscribir en una "crónica de una muerte anunciada" si se toma en cuenta que desde los primeros meses de 1946 la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt fue sometida a diversas intentonas de derrocamiento o de desestabilización: complot de Maracay en Enero de 1946; en Julio de 1946 sectores del gomecismo controlados por López Contreras planearon retomar el poder por la fuerza; el 17 de septiembre de 1946 se presentó un motín en el cuartel "Ambrosio Plaza"; a partir del 11 de Diciembre de 1946 se sucedieron subversiones militares en Maracay, Valencia, Anzoátegui, Trujillo, etc; intento de sublevación militar en Maracay el 26 de Julio de 1947; complot cívico-militar en Caracas, acompañado con brotes de desobediencias de un Cuartel en Puerto La Cruz, sucedido el 12 de septiembre de 1947; anuncio de un supuesto bombardeo a Caracas que se llevaría a cabo el 2 de Febrero de 1948 con aviones que saldrían desde la Nicaragua somocista; etc. Tales expresiones no eran, justamente, el respaldo político a una situación prodemocracia.

A ello se le agregarían los diversos rumores y comentarios públicos sobre el inminente golpe militar al recién inaugurado régimen constitucional esgrimidos desde principios de Noviembre de 1948, negados, por cierto,

por el propio presidente Rómulo Gallegos, por su Ministro de la Defensa, Tte. Cnel. Carlos Delgado Chalbaud, y por el Jefe del Estado Mayor, Tte. Cnel. Marcos Pérez Jiménez. Estos últimos, en nombre de las Fuerzas Armadas le garantizaron al país el 19 de Noviembre del mismo año que "respaldaban al gobierno constitucional"⁴⁰... cinco días después dirigían el golpe militar que dió fin al intento inicial de la Democracia Representativa moderna. En efecto, los dos militares citados más el Tte. Cnel. Luis Felipe Llovera Páez, para ese momento Subjefe del Estado Mayor, el mismo día de la sublevación militarista conformarían la Junta Militar de Gobierno presidida por Delgado Chalbaud.

Entre los factores que se han señalado para explicar tal acción destacan los siguientes: la orientación sectaria del gobierno por parte de Acción Democrática, la cual generaría una oposición sistemática y fuerte de otras agrupaciones partidistas (URD, COPEI, PCV) y de sectores significativos de la sociedad como la Iglesia y los estudiantes; la posible alteración del poder de los latifundistas por la aplicación de la Reforma Agraria aprobada en Octubre de 1948, en tanto, esta Reforma podría ampliar la movilización política de los campesi-

⁴⁰ Ver José Rivas Rivas, Ob. cit. Vol. 3, pp. 213-214.

nos, sumándose así al elemento fuerza de carácter obrero que se condensaba en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, bajo control de Acción Democrática; la no atención de solicitudes formuladas por las Fuerzas Armadas en Octubre de 1948 relativa a la salida del país de Rómulo Betancourt -considerado por los militares como el poder detrás del trono- y de darle amplitud representativa al gabinete ejecutivo, integrado mayoritariamente por militantes accióndemocratistas; la no aceptación, por parte del Presidente Gallegos, de la renuncia colectiva presentada por el Gabinete el 23 de Noviembre de 1948; también se alude a la "ingenua confianza" del Presidente Gallegos en las Fuerzas Armadas, que en una oportunidad (21 de junio) lo llevó, incluso, a dejar encargado de la Presidencia al Ministro de la Defensa -el propio Delgado Chalbaud- y del Ministerio de la Defensa al Jefe del Estado Mayor -el propio Pérez Jiménez-; así mismo se señala la "profunda preocupación" de las Fuerzas Armadas por una supuesta organización de una milicia armada por parte de Acción Democrática, así como frente a un posible llamado a una huelga general promovido por este Partido para hacerle oposición a los rumores e intentonas golpistas; ⁴¹ finalmente, como otro elemento

⁴¹ En el Comunicado N° 1 de las Fuerzas Armadas golpistas puede leerse: "Las Fuerzas Armadas Nacionales, ante la incapacidad del Gobierno Nacional para resolver la crisis existente en el país, en vista de la intromisión de grupos extremistas en la vida nacional, puesta de presente en la mañana de hoy por la decisión de una huelga general de consecuencias incalculables y ante la incitación a las nuevas

que motivó al golpe, se cita la mezcla de intereses de los Estados Unidos, a través de gobiernos dictatoriales anclados en Argentina (Juan Domingo Perón), en Perú (Gral. Manuel Odría), Nicaragua (Anastasio Somoza) y República Dominicana (Leonidas Trujillo), etc, para cercenar el avance democrático en Venezuela, aún cuando, tanto Gallegos como Betancourt siempre negaron la participación norteamericana en el auspicio de la acción militarista del 24 de Noviembre, creyendo en la palabra y buena fe del Presidente estadounidense para ese momento, Harry Truman, a pesar del abierto respaldo que el imperialismo le estaba dando a la instalación y conservación de dictaduras militares en América Latina, bajo el criterio estratégico de garantizar su seguridad nacional en un área concebida como "patio trasero".

No es nuestro interés profundizar en el análisis de cada uno de esos factores que, de alguna manera, configuraron un clima de presión política tanto para la Junta Revolucionaria de Gobierno como para el breve mandato constitucional de Rómulo Gallegos, sino que, en función del objetivo central de esta investigación, avanzaremos más bien en el sentido general de sostener que el golpe

masas para cometer actos vandálicos y alterar el orden, han asumido plenamente el control de la situación para velar así por la seguridad de toda la nación y lograr el definitivo establecimiento de la paz social en Venezuela". (Ver José Rivas Rivas, Ob. cit., Vol. 4, p. 20)

militar de Noviembre de 1948 se encuadró dentro de la necesidad de imponerle límites a la movilización política de algunas fuerzas sociales surgidas en el trienio democrático-liberal, ya que, se pensó, tanto en la cúpula de las Fuerzas Armadas como en el seno mismo de los sectores económicos privados, que aquellas fuerzas podrían cristalizar una crisis del poder imperante, sobre todo, cuando el sector empresarial no tenía plena seguridad y control real de las decisiones del Estado, independientemente, de la naturaleza capitalista de éste. Este temor era posible, incluso, a pesar de las declaraciones anti-comunistas y de la práctica reformista-burguesa emprendidas por Acción Democrática desde el gobierno, las cuales se insertaban en una estrategia de generar confianza en el sector capitalista tanto interno como externo.

Así, pues, el tan sólo hecho de que se podía perder la capacidad de imponer desde el Estado sus intereses de clase -al no tener el control real del gobierno-, podría expresar más aún el miedo a una posible crisis de hegemonía, en tanto, ruptura del consentimiento de las clases dominadas en torno al aceptamiento del interés particular de la clase dominante como interés general del

todo social.⁴² Frente a tales posibilidades, la clase capitalista necesitaba mantener el poder y conservar la hegemonía. Para ello no le quedaba otra alternativa sino la de recurrir al auspicio de la salida de fuerza condenada en el asalto militar. Y no es que estemos pensando en el mecanicismo "crisis de la democracia-salida militarista", sino que apuntamos a la tesis de que el sector dominante en un momento histórico determinado puede mostrar su acción (urgencia de eficacia) por un reacomodo de la instrumentación del dominio económico-político y la hegemonía bajo una modalidad distinta de gobierno: la posibilidad histórica de regímenes políticos distintos, sin alterar al Estado, es posible por esa capacidad de movilización política del sector social dominante.

Ubicándonos en el contexto histórico del momento, vale la pena reproducir el siguiente esbozo de Ramón J. Velásquez, en el cual reseña la situación sociopolítica constituida a partir del "trienio adeco" y donde deja entrever algunas de aquellas fuerzas sociales que le daban intencionalidad crítica al espacio de lo político.

⁴² Para una visión más detallada sobre los referentes teóricos que sostienen la distinción entre crisis de poder y crisis de hegemonía recomendamos la lectura en la cual nos hemos basado: Victor Durand y Enrique Contreras, "Comentarios: Una Nación sin Burguesía o una Burguesía sin Nación", en *Clases Sociales y Crisis Política en América Latina*, México, Siglo XXI, 1977, pp. 71-96.

Este destacado historiador indica: "Se habían fundado, y tuvieron oportunidad de entrar en contacto con el pueblo, cuatro partidos políticos que reclutaron sus efectivos en capas sociales que hasta 1945 fueron remisas al juego político. (...) La captación de la masa estudiantil había alcanzado el nivel de la escuela primaria y de los liceos (...) Durante estos tres años se habían fundado más de quinientos sindicatos y había nacido una poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela. En dos jornadas electorales se habían movilizado, un millón quinientos mil venezolanos. Desconocidos hombres de la clase media y nuevos dirigentes sindicales tuvieron, por vez primera, oportunidad de sentarse en la mesa de las grandes decisiones nacionales y un gran sector del empresariado nacional (...) acababan de descubrir la ventaja de vivir en un régimen de instituciones, en donde pudieron defender sus intereses. El campesinado participó manera intensa en los programas de créditos (...), al mismo tiempo que se integraba al mundo de la lucha sindical a través de la nueva Federación Campesina".⁴³

En ese contexto de innegable significación -hay que tener presente la larga dictadura gomecista que contuvo

⁴³ Ramón J. Velásquez, "Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el último medio siglo", en *Venezuela Moderna, Medio Siglo de Historia 1926-1976*, Caracas, Edit. Ariel-Fundación Eugenio Mendoza, 1979, 2ª edic. pp. 137-138.

estas expresiones políticas de la sociedad- se presentó la respuesta violenta militarista procurando la reordenación del control político del Estado, sin que ello se entienda como una actuación motivada exclusivamente por alguna inquietud personalista de los líderes militares. Nosotros creemos que alrededor de la acción golpista se movieron otros intereses que conscientemente articularon la posibilidad y el hecho cierto de aquella iniciativa de fuerza al despliegue de la hegemonía capitalista y a la seguridad de clase de que no se alterara la constitución del Estado como tal. Veamos.

El sector militar que liderizó el golpe fue el mismo que había participado en el derrocamiento de Medina en 1945 y que por iniciativa propia le entregó el poder a Acción Democrática con la condición de que este partido desarrollara una línea de real participación democrática, sobre todo, la relativa a la garantía del derecho de elección universal, directa y secreta del Presidente y los cuerpos legislativos. Incluso, hubo un mejoramiento significativo de las condiciones ejecutivas, laborales y de suministro de armamentos modernos a las Fuerzas Armadas Nacionales durante el trienio democrático-liberal.⁴⁴ Así mismo, en el transcurso del mandato guberna

⁴⁴ En el mensaje que Rómulo Betancourt, como Presidente de la Junta, presentó a la Asamblea Nacional Constituyente, el 20 de Enero de 1947, destacó lo siguiente: "El gobierno revolucionario le dió un vuelco a la situación dentro de los cuarte-

mental aludido tan sólo se hicieron manifiestamente visibles contradicciones con la Iglesia (sobre todo cuando esta consideró que estaba en peligro su influencia en el terreno educativo por el contenido del Decreto 321 de la Junta Revolucionaria de Gobierno y por el despliegue de las tesis del Estado-docente definidas en el programa de Acción Democrática), y no hubo públicamente malestar alguno por parte del sector capitalista frente a las medidas económico-políticas tomadas en ese lapso. Incluso, la misma dirigencia de las Fuerzas Armadas se mostró contraria a las sublevaciones militares protagonizadas por un sector medio de la oficialidad y sólo después del primer trimestre del gobierno de Gallegos aquellos llegaron a mostrar secretamente un cierto interés por la toma violenta del poder. Entonces, ¿qué motivó el golpe, si se podía pensar que había cierta articulación orgánica entre gobierno -sector económico capitalista- Fuerzas Armadas Nacionales? O como se interroga Andrés Stambouli: "¿Cómo entender entonces que, a pesar de haber gobernado en estrecha colaboración, ejército y partido, duran

les. Aumentó en un 37 por ciento los sueldos de los oficiales, en un 58 por ciento las raciones a las tropas y en un 50 por ciento lo destinado a la alimentación de las mismas. (...) Se prestó especial atención al desarrollo de la marina de guerra y de la aviación militar, y en material flotante y aéreo, así como un moderno material bélico, se adquirieron o contrataron cantidades superiores a las correspondientes al decenio 1935-1945. (...) Así procedió la Junta por creer que todo Estado moderno y democrático necesita afianzar su seguridad interna y externa en instituciones armadas técnicamente idóneas". (-----, La verdadera Historia de la Revolución de Octubre, 1945, Edic. cit. p. 85).

te tres años, y de haber recibido AD un total respaldo popular en las elecciones, el proceso de instauración de la democracia representativa y del sistema de partido culminara en tan breve tiempo, en el distanciamiento del ejército con respecto al gobierno y en la caída de éste?".⁴⁵

Todo nos hace pensar que hubo cierto interés subyacente en el intento golpista, sobre todo, si se entiende que éste no podía desligarse de la búsqueda de un ordenamiento hegemónico de mayor efectividad (precisión de identidad, solidaridad y claridad del proyecto dominante) que la ofrecida dentro del incipiente marco democrático, y que la fuerza militar en sí misma no llega a alcanzar la condición de clase capaz de fundamentar un proyecto de organización social determinado, reservado exclusivamente a clases específicas que generan relaciones sociales de producción fundantes de la dialécticidad de cualquier formación económico-social.

Para nosotros, las participaciones militares en la toma de poder devienen de su movilización como instrumentos de intereses de clase precisos (tanto para una acción fascista como para un ejercicio revolucionario),

⁴⁵ Andrés Stambouli, Ob. cit., p. 70

caso contrario, convertirían la toma del poder en un fin en sí mismo e impregnarían su ejecución de tintes militaristas permanentes, a partir de los cuales, se hace difícil lograr el consenso social necesario para la consolidación de la hegemonía y la legitimación del Estado. "Este análisis no debe llevar a mal entendidos -señala Ruy Mauro Marini, al referirse a la imbricación actuante entre la burguesía monopólica y las Fuerzas Armadas-. Los tecnócratas civiles y militares que se ocupan de la gestión del Estado, no son más que la representación política del capital y en tanto que tal, no cabe especular sobre su autonomía, más allá de lo que se puede hacer, con cualquier representación política respecto a la clase que representa; en otros términos: es profundamente erróneo calificar a esa tecnocracia como burguesía estatal en el mismo plano que la clase burguesa propiamente dicha. Del mismo modo, la fusión de los intereses corporativos de las FF.AA. y de la burguesía monopólica no debe obscurecer el hecho de que esta última represente una fracción propiamente capitalista de la burguesía mientras que las FF.AA. (o, para ser más precisos, la oficialidad) no es sino un cuerpo de funcionarios cuya voluntad económica y política es rigurosamente la de la clase a que sirven" ⁴⁶ (Resaltado nuestro).

⁴⁶ Ruy Mauro Marini, "Situación actual y Perspectiva de la lucha de clases en América Latina", en Revista Ko-eyú, Nº 23, Caracas, Abril-Mayo 1982, p. 38

En el caso que estamos tratando no se puede olvidar el hecho mismo de que ni el sector emergente de la burguesía, con tendencias monopolistas y de clara relación con el capital internacional, ni su sector tradicional (ambos representados como unidad de clase en Fedecámaras), habían conformado un Partido Político como tal y si bien tanto Acción Democrática como COPEI, uno desde el gobierno, otro desde la oposición, se habían identificado con la ideología capitalista y procuraban su desarrollo como partidos de masas movidos por un claro pragmatismo-reformista, aquel sector monopolista de la burguesía aún no tenía plena seguridad hegemónica frente al efecto movilizador implícito en las ejecuciones políticas de la Democracia Representativa.

En otras palabras, para decirlo con Gramsci, ¿No se podía estar allí frente a un temor de la clase dominante creado por la creencia de una crisis de "representatividad" de las organizaciones políticas articuladoras del proyecto hegemónico? Nosotros pensamos que sí, y a ello le agregamos un factor económico importante: probablemente ya se avizoraban los límites propios de un modelo económico montado sobre la expansión del mercado interno, lo cual repercutía negativamente en los márgenes de ganancias del capital, sobre todo, si el Estado seguía aumentando las respuestas sociales a las exigencias

reivindicativas de los sectores populares, como parecía indicarlo el reformismo accióndemocratista. El sector emergente de la burguesía monopolista anticipaba su fortaleza en su imbricación con un modelo de crecimiento económico con mayores articulaciones con el mercado y el capital internacional, tal cual, como se empezó a profundizar en las políticas económicas de la dictadura militar, sin que ello niegue la importancia que esta le dió a la consolidación del mercado interno.

Esos dos factores -político y económico- nos permiten ubicar, en términos generales, las raíces definitivas del golpe militar en la siguiente caracterización: "Los Estados militares constituyen una forma de Estado burgués 'de excepción' en el que las Fuerzas Armadas, como cuerpo y bajo la conducción de sus 'mandos naturales', y guiados por la Doctrina de Seguridad Nacional, asumen el manejo del Aparato Estatal para realizar los intereses del capital monopolista asociado y del imperialismo, en un período de crisis estructural en el proceso de acumulación capitalista dependiente."⁴⁷ En el caso venezolano en esa "crisis estructural" el factor político fue más determinante.

47 Tomás Amadeo Vasconi, "Los Estados Militares: función histórica y alternativas de recambio", en Revista Ko-eyú, N° 23, Caracas, Abril-Mayo 1982, p. 9

Desde la intención de esa fracción dominante de la burguesía de lograr la unidad de clase en función de la hegemonía es posible entender el respaldo y reconocimiento que Fedecámaras le dió a la Junta Militar, en abierta contradicción con aquella postulación de principio formulada apenas en Marzo de ese mismo año (Carta de San Cristóbal) donde reconocía lo siguiente: "A la Democracia política, que es vocación de los venezolanos, debe corresponder una verdadera democracia económica..."⁴⁸ (Resaltado nuestro).

¿No se sentía, entonces, el sector empresarial parte de esa vocación democrática? ¿O aquella declaración era, simplemente, una ilusión ideológica? Tanto fue aquella identificación con el golpe que en la resolución de la V Asamblea Anual del organismo empresarial celebrada en 1949 no se menciona en absoluto ninguna crítica a la Junta Militar y se continúa con la línea de reclamar ampliación de la economía privada capitalista como si en el país no hubiese pasado absolutamente nada, como si el proyecto democrático no hubiese sufrido una clara alteración.

⁴⁸ Fedecámaras, Ob. cit., p. 85